

En el ambiente de los protagonistas del negocio de móviles se percibe una resignada actitud ante el retraso en la disponibilidad de la denominada tercera generación (3G).

¿Silencio consentido?

Parece que ese retraso es hijo de nadie; se asume como algo inevitable en proyectos tan complejos como éste. Por ello, resulta difícil identificar a los responsables de haber generado unas expectativas incumplidas que tanto han contribuido a deteriorar la salud financiera de los operadores y fabricantes.

Pero hablar de retraso implica la existencia de una fecha de referencia inicial: ¿quién determinó esa fecha en la que tenía que estar disponible la 3G? ¿qué criterios se utilizaron para fijarla? Ciñéndonos al caso de España, las pistas nos sitúan en noviembre de 1999 con la publicación, por el entonces Ministerio de Fomento, de la convocatoria para el otorgamiento por concurso de cuatro licencias para el establecimiento de la red y para la explotación del servicio de comunicaciones móviles de tercera generación. En el correspondiente pliego se determinaba que el 1 de agos-

to de 2001 el servicio debería estar implantado, como mínimo, en las zonas urbanas con más de 250.000 habitantes. Además, se exigía el cumplimiento de la normativa técnica del ETSI (*Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación*) sobre sistemas UMTS (*sigla que identifica la norma europea para la 3G*). La resolución del concurso publicada el 13 de marzo de 2000 mantiene todas las obligaciones de la convocatoria, sin alterar la fecha de implantación a pesar de que el pliego admitía la posibilidad de modificarla. El incumplimiento del primero de agosto de 2001 fue justificado por el retraso en la disponibilidad del equipamiento necesario, circunstancia que impacta directamente sobre las capacidades de la industria del sector. En este contexto cabe preguntarse sobre cómo calificar el papel de la industria en la aventura de la tercera generación de los sistemas móviles:

¿marginación irresponsable? ¿ignorancia descalificante? o víctima inocente?.

Desde el principio la industria asumió el liderazgo del proceso normativo de la 3G. Ella es la que estimuló la presentación de propuestas, definió los métodos de trabajo, presidió las negociaciones para lograr acuerdos entre las diferentes opciones y la que concertó intereses sobre los derechos de propiedad intelectual. En definitiva, la industria de las telecomunicaciones ha hecho y sigue haciendo un esfuerzo relevante para facilitar la existencia de una nueva tecnología que haga realidad la "Internet de banda ancha desde el móvil". Por todo ello, en la aventura de la 3G el sector industrial es el que mejor puede evaluar las dificultades y plazos para la disponibilidad de soluciones comerciales tal y como establecía la convocatoria de noviembre de 1999.

Era por entonces cuando se estaba trabajando en completar una versión de las especificaciones técnicas del UMTS que tuviera la suficiente consistencia y fiabilidad para asegurar el adecuado funcionamiento de las primeras instalaciones operativas del sistema. La tarea se realizaba, y se sigue realizando, en el seno de un foro de organismos de normalización de diferentes regiones denominado 3GPP (de *Third Generation Partnership Project*), con participación del ETSI europeo y de representantes de EE UU, Japón, China y Corea. El trabajo se organizó en diferentes fases de manera que en cada una de ellas se dispusiera de especificaciones suficientemente detalladas y consistentes, pero con un progre-



sivo avance en las prestaciones de los servicios. Fue en marzo de 2000, coincidiendo con la resolución del concurso en España, cuando se adoptó la versión de la primera fase con unas facilidades muy básicas de dudoso interés para el mercado; en marzo de 2001 se aprobó la versión correspondiente a la segunda fase, estando anunciada una nueva para 2002.

Es difícil dar una respuesta precisa sobre el tiempo que transcurre entre la adopción de una especificación suficientemente detallada y su implantación operativa. Si repasamos lo acontecido con el denominado sistema GSM que caracteriza a la actual segunda generación, en 1990 se aprobó la versión que debería utilizarse como pauta para iniciar el despliegue comer-

cial en Europa. Fue en 1992 cuando se realizaron, en Barcelona y Sevilla, las primeras instalaciones de prueba en España, pero hasta 1995 no se impulsó su comercialización. Es cierto que este plazo de cinco años estuvo condicionado por la existencia previa de un servicio (MoviLine) con una cobertura del 90% del territorio y de un 98% de la población y por la ausencia, hasta 1995, de competencia en el mercado. Por ello, es correcto extrapolar directamente la referencia del GSM en España pero si cabe suponer que, dada la mayor complejidad del proyecto de 3G, serán precisos al menos tres años desde la adopción de la especificación técnica detallada para disponer de las primeras instalaciones comerciales. Por tanto, el requi-

rimiento del 1 de agosto de 2001 fue una frivolidad tecnológica y su aplazamiento posterior, esta vez previa consulta al sector, a junio de 2002 ha exigido una gran dosis de flexibilidad. Como sucede con cualquier innovación tecnológica de la trascendencia de la 3G, el proceso de introducción es lento y complejo; las especificaciones iniciales son incompletas, incluyen opciones y todos, fabricantes y operadores, son víctimas de la falta de experiencia en su aplicación práctica. Quizá ya no nos acordemos o no hayamos sido conscientes de lo sucedido, pero en la introducción y extensión del GSM se fueron incorporando progresivamente prestaciones que no existían en el primer momento.

Alrededor de la 3G se han suscitado unas expectativas demasiado ambiciosas y para su introducción y comercialización será preciso recorrer un largo camino en el que, además de resolver la disponibilidad de unos terminales atractivos, se precisará de la colaboración entre fabricantes y operadores para asegurar la adecuada compatibilidad. Los clientes estamos acostumbrados a las facilidades del sistema GSM con su capacidad de itinerancia entre redes de diferentes operadores y resultará difícil de aceptar el uso de una nueva tecnología que no nazca, al menos, con las prestaciones ya consolidadas de los sistemas y servicios existentes.

Para evitar errores es importante que la industria del sector abandone su habitual discreción y que periódicamente oriente a la sociedad, si se prefiere desde un ámbito asocia-

tivo, acerca de las previsiones más realistas de la denominada tercera generación. No solo sobre los plazos para su disponibilidad, sino también educando a los potenciales usuarios respecto a las ventajas que progresivamente les ofrecerá, pero evitando mensajes grandilocuentes y engañosos que generen expectativas que luego produzcan decepción al comprobar que las prestaciones realmente disponibles, al menos en las primeras etapas, son inferiores a las previstas o incluso inferiores en algunos aspectos a las hoy en día operativas con el GSM. Algún fabricante ya ha anticipado su visión particular, señalando que el despliegue de los servicios UMTS no se producirá antes de 2003 y no alcanzará una escala significativa antes de 2004. Algunos operadores han decidido aplazar sin fecha fija, no antes de 2003, su lanzamiento comercial; otros advierten tímidamente que la "Internet de banda ancha desde el móvil", aquélla que pondrá a nuestra disposición, sin limitaciones de tiempo y lugar, la mensajería con imágenes, los juegos interactivos y la videoconferencia, es una aspiración de largo recorrido. En Bélgica ya se ha reconocido oficialmente el aplazamiento de la puesta en servicio hasta septiembre de 2003, es decir un año después de la fecha inicialmente prevista. No cometamos más frivolidades y convirtamos el retraso en una oportunidad para validar y consolidar las especificaciones, adquirir la necesaria experiencia, instruir al mercado, promover la creación de aplicaciones y contenidos. Pero ello exige romper el silencio.

